

Señores
TRIBUNAL ADMISNITRATIVO DE SANTANDER - JUEZ CONSTITUCIONAL (Reparto)
E. S. D.

Asunto: Acción de tutela contra la Gobernación de Santander, Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral.

LUIS FERNANDO ARRIETA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.544.337 expedida en el municipio de Cimitarra, mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de Bucaramanga, actuando en nombre propio, interpongo ACCIÓN DE TUTELA contra de la GOBERNACIÓN DE SANTANDER, LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por la vulneración de mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, a la participación política, al derecho de elegir y ser elegido, y al principio de publicidad, de conformidad con los artículos 2, 13, 29, 40 y 209 de la Constitución Política de Colombia.

I. HECHOS

- 1. Que el señor Gobernador del Departamento de Santander con el Decreto 533 de octubre de 2025 convocó a elecciones complementarias para la Alcaldía de Bucaramanga fijando el día 14 de diciembre de 2025, con el fin de suplir la vacancia del cargo de alcalde municipal de Bucaramanga Santander.
- 2. Que la Registraduría Nacional Electoral a través del su Director de Gestión Electoral expidió la Resolución No. 13206 del 14 de octubre de 2025 *“Por medio de la cual se fija el calendario electoral para la nueva elección de alcalde de Bucaramanga – Santander, que se realizará el 14 de diciembre de 2025”*, donde se nota que el calendario electoral empieza el día 14 de octubre de 2025 con:
- 3. Que de acuerdo con el enlace: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/20251015_resolucion-13206-del-14-de-octubre-de-2025.pdf se puede observar que la referida resolución fue comunicada el 15 de octubre de 2025, a través de la página web de la dicha entidad.

RESUELVE:		
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el calendario electoral con las diferentes etapas preclusivas y actividades que se deben desarrollar para la nueva elección de alcalde en el municipio Bucaramanga - Santander, que se realizará el 14 de diciembre de 2025; así		
FECHA	CONCEPTO	SOPORTE LEGAL
14 de octubre de 2025	Inicia registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, comités promotores del voto en blanco y periodo de recolección de apoyos.	Decreto núm. 533 del 14 de octubre de 2025 Resolución núm. 4662 del 3 de junio de 2016 de la Registraduría Nacional del Estado Civil
	Publicación del censo electoral	Art. 8 de la Ley 6 de 1990

- 4. Que en la Resolución No. 13206 del 14 de octubre de 2025 *“Por medio de la cual se fija el calendario electoral para la nueva elección de alcalde de Bucaramanga – Santander, que se realizará el 14 de diciembre de 2025”* fijó como fecha de inscripción de candidaturas un día después de publicado el referido acto administrativo.

5. Dicha situación impidió a los ciudadanos, movimientos políticos y posibles candidatos conocer oportunamente las fechas de inicio de los términos electorales, afectando gravemente la igualdad en el acceso a la contienda electoral, así como el derecho a participar y ser elegido.

FECHA	CONCEPTO	SOPORTE LEGAL
15 de octubre de 2025	Inicia el periodo de inscripción de candidatos para los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco. (Día siguiente de la convocatoria a elecciones)	Art. 30 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 Resolución núm. 4662 del 3 de junio de 2016 de la Registraduría Nacional del Estado Civil

6. El acto administrativo que fija el calendario electoral carece de eficacia jurídica, pues no puede producir efectos antes de ser publicado. Tal irregularidad desconoce el principio de publicidad y transparencia que rige la función administrativa (art. 209 C.P.) y vulnera el debido proceso y la seguridad jurídica.
7. Esta vulneración tiene efectos directos e irreparables sobre los derechos fundamentales mencionados, especialmente al tratarse de un proceso electoral de corta duración, razón por la cual esta tutela se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
8. Que el haber publicado el calendario electoral para las elecciones viola no solo principio y derechos fundamentales, sino también la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000 y 1475 de 2011.
9. Que el acto administrativo por el cual se aprueba y da validez al calendario electoral elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil es la Resolución No. 13206 del 14 de octubre de 2025 “Por medio de la cual se fija el calendario electoral para la nueva elección de alcalde de Bucaramanga – Santander, que se realizará el 14 de diciembre de 2025”.
10. Que el Gobernador en atención a sus atribuciones, solo convoca a lecciones, que, en razón a esa convocatoria, la Registraduría Nacional del Estado Civil con vigilancia del Consejo Nacional electoral emite un acto administrativo que fija el calendario electoral, de acuerdo con la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000 y 1475 de 2011 y demás normas reglamentarias y complementarias.

II. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

La actuación de la administración (Gobernación de Santander y Registraduría Nacional del Estado Civil) vulnero derechos como:

a. Violación al principio de publicidad (art. 209 C.P. y art. 3 num. 9 y art. 65 CPACA)

El principio de publicidad es una de las garantías fundamentales que sustentan la legitimidad y la eficacia del Estado de derecho. Lejos de ser un mero formalismo procedimental, este principio exige que las actuaciones de los poderes públicos y los procesos legales que afectan los derechos de los ciudadanos sean conocidos por todos. Su importancia radica en su triple función: establecer la seguridad jurídica, garantizar la transparencia administrativa y judicial, y ser un mecanismo esencial de control democrático y prevención de la corrupción.

En primer lugar, la publicidad es el cimiento de la seguridad jurídica. En el ámbito normativo, la máxima *ignorantia juris non excusat* (la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento) solo puede aplicarse justamente si existe la certeza de que la ley fue debidamente publicada antes de entrar en vigor. La publicación oficial de las leyes, decretos y reglamentos es lo que les otorga su carácter obligatorio y oponible a terceros. Sin esta difusión, las normas carecerían de validez material, transformándose en reglas ocultas que violarían el derecho fundamental a la certeza legal. En el ámbito judicial y administrativo, la publicidad de los actos procesales —como las citaciones, notificaciones y sentencias— asegura el derecho de defensa y garantiza que ninguna decisión coercitiva se tome de forma clandestina.

En segundo lugar, el principio de publicidad es el antídoto más eficaz contra la arbitrariedad y la opacidad institucional. Al someter las actuaciones de los funcionarios, la adjudicación de contratos públicos o la gestión de los fondos estatales al escrutinio del público, se activa el control social de la ciudadanía. Cuando el proceso de toma de decisiones es visible, se reduce drásticamente el espacio para prácticas corruptas o el ejercicio discrecional del poder sin rendición de cuentas. Esta transparencia forzosa fortalece la ética pública y obliga a los agentes estatales a justificar sus decisiones, promoviendo la responsabilidad individual y colectiva.

Finalmente, la publicidad es indispensable para la salud de la democracia. Un gobierno que opera en la oscuridad debilita la confianza de sus ciudadanos. Por el contrario, un Estado que garantiza la publicidad de sus actos fomenta la participación informada y activa del cuerpo social. La posibilidad de que cualquier ciudadano acceda a documentos escuche debates legislativos o presencie un juicio convierte al ciudadano en un fiscalizador permanente y legitima la acción estatal. Es un mecanismo que transforma la desconfianza potencial en un ejercicio constante de vigilancia cívica.

Entonces, en conclusión, el principio de publicidad trasciende la esfera técnica del derecho para erigirse como un pilar ético y político de la convivencia democrática. Es la herramienta que convierte la ley en obligatoria, los procedimientos en justos y el gobierno en responsable. Al exigir la máxima apertura en la gestión de lo público, garantiza la seguridad jurídica, previene la corrupción y, crucialmente, sostiene la confianza entre el Estado y el ciudadano. Su defensa inquebrantable es, por lo tanto, una defensa de la democracia misma.

Este principio encuentra su fundamento jurídico en el artículo 209 constitucional el cual establece:

“ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”

Por otra parte, tenemos el artículo 3 que en su numeral 9 señala:

“ARTÍCULO 3. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

(...)

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.”

La misma norma su artículo 65 establece:

“ARTÍCULO 65. Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.”

El Consejo de Estado en diferentes sentencias a ha venido emitiendo a lo largo de sus pronunciamiento se ha referido que los actos administrativos de carácter general carecen de obligatoriedad antes de su publicación, y las actuaciones desarrolladas con fundamento en ellos son ineficaces y contrarias al principio de publicidad, por lo que procede su revocatoria o anulación también ha mencionado que la falta de publicación oportuna del calendario electoral afecta la transparencia y la igualdad en la contienda.

Entonces, la Gobernación de Santander y la Registraduría Nacional del Estado Civil permitieron que el calendario electoral iniciara sin haberse publicado el acto que lo fijaba, impidiendo que los, movimientos políticos, grupos significativos, partidos políticos y ciudadanos conocieran oficialmente los plazos para la inscripción de candidatos, renunciaciones o modificaciones; por tanto, el calendario no podía iniciar válidamente el 14 de octubre, ya que la publicación del 15 es la que le da fuerza jurídica a ese calendario, es decir, no pueden ser retroactivo, es por esto que se vulnera la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza legítima que los ciudadanos deben tener en las autoridades electorales.

b. Violación al derecho al debido proceso administrativo (art. 29 C.P.)

El debido proceso administrativo constituye el conjunto de formalidades esenciales y garantías sustanciales que la Administración Pública debe observar en cualquier procedimiento destinado a emitir un acto o decisión que afecte los derechos o intereses legítimos de los administrados. Más allá de ser un simple catálogo de trámites, este principio es una derivación directa del concepto constitucional de Estado de derecho y opera como el principal mecanismo para someter el ejercicio del poder público al imperio de la ley y a los criterios de justicia. Su importancia es vital, pues asegura la legalidad, previene la arbitrariedad y fortalece la legitimidad de las instituciones.

En primer lugar, el debido proceso es la garantía por excelencia de la legalidad administrativa. La Administración, a diferencia de los particulares, ejerce potestades de naturaleza pública, lo que implica una capacidad de coerción que debe ser estrictamente delimitada. Este principio exige que todo acto administrativo que cree, modifique o extinga obligaciones y derechos debe ser puesto en conocimiento del o los interesados. Para lograr esto, el proceso debe asegurar elementos cruciales: la comunicación del acto administrativo de carácter general (Principio de publicidad), para que así pueda ser oponible a terceros o a los interesados. De esta manera, el proceso se convierte en un instrumento racional que evita que las decisiones se tomen de forma caprichosa o basada en intereses ajenos al bien común.

En segundo lugar, el debido proceso actúa como un escudo protector para el ciudadano. Es la herramienta que equilibra la desigualdad inherente entre el poder estatal y el administrado individual. Al garantizar el derecho a ser oído y la igualdad de partes durante la tramitación, se asegura que la perspectiva y los derechos del afectado sean considerados antes de que la decisión administrativa se consolide. La exigencia de una decisión motivada, por su parte, permite al ciudadano comprender el razonamiento de la Administración y, más importante aún, le dota de los fundamentos necesarios para ejercer su derecho a la impugnación ante instancias superiores o ante la jurisdicción contencioso-administrativa, según corresponda.

Finalmente, la estricta observancia de las garantías procesales incrementa la confianza institucional. Cuando los procedimientos son transparentes, predecibles y justos, se refuerza la percepción de que la Administración no es un ente opaco e inaccesible, sino un servidor público sujeto a reglas claras. Esta legitimidad se extiende a la efectividad de las políticas públicas, ya que una decisión, incluso si es adversa, será más fácilmente aceptada por el administrado si se siente respetado durante el proceso que la originó. La ausencia del debido proceso, en cambio, genera un clima de inseguridad jurídica y desconfianza que debilita la convivencia democrática.

En conclusión, el debido proceso administrativo es más que una simple técnica jurídica; es un principio cardinal que instrumentaliza la legalidad en el seno de la gestión pública. Es indispensable porque somete la potestad estatal a un cauce racional y justo, otorga al ciudadano las herramientas necesarias para su defensa y, al hacerlo, eleva la calidad y la aceptabilidad de los actos administrativos. Su cumplimiento riguroso es, sin duda, una obligación irrenunciable de todo poder público en una sociedad que se precie de ser democrática.

La Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2011: estableció que la falta de publicidad en actos administrativos vulnera el debido proceso y la posibilidad de defensa y a su turno el concejo de estado en diferentes sentencias a referido que un calendario electoral mal expedido puede afectar la validez del proceso electoral completo.

El acto administrativo empezó a producir efectos sin haberse publicado, lo que impidió a los ciudadanos ejercer su derecho a conocer, objetar o participar desde el inicio, esto implica que la Registraduría actuó sin respetar el procedimiento legal, generando una decisión ineficaz y contraria al debido proceso.

c. Violación al derecho a la igualdad (art. 13 C.P.)

El acto administrativo de carácter general, por su naturaleza normativa y su vocación de afectar a una pluralidad indeterminada de sujetos, exige la máxima cautela en su promulgación. En este contexto, la debida publicación no es un mero requisito formal, sino la condición *sine qua non* para su eficacia, su oponibilidad a terceros y, crucialmente, para salvaguardar el derecho fundamental a la igualdad de todos los ciudadanos. La expedición de un acto administrativo general sin su correcta publicidad constituye una transgresión directa de este derecho, pues instaura una desigualdad material basada en el conocimiento privilegiado de la norma.

El derecho a la igualdad se manifiesta en la esfera pública a través de la igualdad ante la ley y la igualdad en la aplicación de la ley. Para que estos principios se materialicen, es indispensable que todos los sujetos tengan el mismo acceso y la misma oportunidad de conocer las normas que rigen su conducta. El principio de publicidad, al requerir la divulgación en un medio oficial (como el Diario o Gaceta Oficial), asegura precisamente esta accesibilidad universal. Cuando la Administración omite o realiza defectuosamente la publicación de un acto general (un reglamento, un decreto que modifica tarifas o un régimen de licencias), se produce una segregación ilegítima de la ciudadanía.

Esta desigualdad se manifiesta de dos maneras principales. En primer lugar, se crea un círculo de conocimiento privilegiado. Solo aquellos funcionarios, asesores o personas vinculadas estrechamente con la agencia emisora tendrán certeza sobre el contenido del acto. Para el resto de los administrados, la norma permanece oculta. Esta disparidad en la información afecta directamente la igualdad de oportunidades, pues mientras unos pueden adaptar su conducta o planificar sus negocios conforme a la nueva regulación, el resto queda expuesto a sanciones o a la imposibilidad de ejercer sus derechos por simple ignorancia de una norma cuya entrada en vigor debería haber sido pública.

En segundo lugar, la falta de publicidad genera una indefensión material que atenta contra el debido proceso y la igualdad de armas. Si un ciudadano es sancionado o se ve afectado negativamente por una disposición de carácter general que nunca le fue dada a conocer de manera oficial (oportuna), se vulnera su capacidad de defensa. ¿Cómo puede un administrado ejercer su derecho a impugnar o a controvertir una norma que desconocía por completo? La ley debe ser aplicable a todos por igual, pero solo puede ser exigible a partir de su publicación. La exigencia de cumplimiento de un acto secreto, por lo tanto, no es solo un defecto de forma, sino una aplicación desigual y arbitraria de la potestad sancionadora del Estado.

En conclusión, el incumplimiento del principio de publicidad en la expedición de actos administrativos generales es más que un simple vicio procedimental; es un ataque directo al derecho a la igualdad. Este defecto quiebra la confianza en la Administración, convierte el poder en un ejercicio potencialmente arbitrario y, al dividir a los ciudadanos en informados y desinformados, socava la base misma de un ordenamiento jurídico que se presume justo e igualitario. Por ello, la publicación correcta de la norma es la prueba irrefutable de que la Administración actúa bajo el principio de legalidad y respeta la dignidad de todos sus administrados por igual.

Desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Concejo de Estado se ha fortalecido el concepto de igualdad que aplica para quienes habitamos en el territorio nacional, no es más que hacernos iguales a todos ante la ley.

d. Violación al derecho de elegir y ser elegido (art. 40 C.P.)

El artículo 40 de la Constitución consagra el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, lo que incluye postularse, votar y ser elegido, entonces el derecho a elegir (sufragio activo) y a ser elegido (sufragio pasivo) es el pilar axiológico de cualquier sistema democrático representativo. Estos derechos políticos son facultades inherentes a la ciudadanía que garantizan el principio de soberanía popular. Constituyen el mecanismo legítimo a través del cual la voluntad del pueblo se transforma en mandato de gobierno. Por lo tanto, cualquier violación a estas

prerrogativas, especialmente aquella derivada de fallas en la transparencia administrativa es una agresión directa al corazón del sistema democrático.

La columna vertebral de cualquier contienda democrática es el **Calendario Electoral**, un acto administrativo de carácter general expedido por la autoridad competente (Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Electoral). Este acto no solo establece las fechas de la votación, sino también los plazos perentorios para el registro de electores, la inscripción de candidaturas, la rendición de cuentas de financiación y el inicio de las campañas. Dada su naturaleza obligatoria y su impacto masivo, la **debida y oportuna publicidad** del calendario es la condición *sine qua non* para su validez y, sobre todo, para asegurar la igualdad material de todos los ciudadanos.

La violación del derecho a **elegir (sufragio activo)** se consuma cuando la falta de publicidad del calendario impide al ciudadano ejercer su voto. Si los plazos para actualizar la cédula, inscribir el lugar de residencia o conocer la fecha exacta de la elección permanecen en la opacidad administrativa, el elector queda en un estado de indefensión por ignorancia. Esta omisión crea una discriminación ilegítima, donde solo aquellos con conocimiento privilegiado o acceso a fuentes internas pueden cumplir con las formalidades previas. Al no poder cumplir estos requisitos por desconocimiento, el ciudadano ve vulnerado su derecho a participar en igualdad de condiciones, convirtiendo el proceso en una elección restringida en lugar de universal.

De manera similar, el derecho a **ser elegido (sufragio pasivo)** queda totalmente anulado por la publicidad indebida. Para un aspirante a un cargo, el calendario es el mapa legal que rige su postulación. Las fechas de inscripción, los periodos de recolección de firmas, los topes de gastos y los momentos procesales para impugnaciones son estrictamente delimitados por este acto. La omisión de su publicación o una difusión defectuosa tiene como efecto práctico la exclusión arbitraria de candidatos. Un opositor o un candidato independiente que, por desconocimiento de un plazo no publicado, incumple el requisito de inscripción o de declaración patrimonial, es privado de su derecho a la competencia política, limitando artificialmente las opciones del electorado.

En esencia, la indebida publicidad del calendario electoral transforma la elección en un acto de fe y no en un ejercicio de la razón democrática. Viola el principio de igualdad al crear una diferencia insalvable entre quienes conocen la norma y quienes la ignoran. Las consecuencias son profundamente corrosivas: se socava la confianza pública, se debilita la legitimidad del gobierno electo y se utiliza una herramienta administrativa (el calendario) para fines de exclusión política, contraviniendo la transparencia que exige el proceso electoral.

En conclusión, la defensa de la democracia pasa necesariamente por la defensa de la publicidad administrativa. Solo a través de la máxima divulgación del calendario electoral, asegurando que sus plazos sean conocidos por cada ciudadano y candidato con suficiente antelación y claridad, se puede garantizar que el derecho a elegir y ser elegido se ejerza plenamente, haciendo del proceso electoral un reflejo genuino de la voluntad soberana del pueblo.

La Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a ser elegido se ejerce en condiciones materiales de igualdad y bajo procedimientos transparentes.

Así mismo en sentencia, Sentencia T-098 de 2014 ha dicho que toda restricción o irregularidad administrativa que impida la participación política vulnera el artículo 40 de la Carta.

De acuerdo con los principios y derechos vulnerados por la actuación de la Registraduría Nacional del Estado Civil con la expedición de la Resolución No. 13206 del 14 de octubre de 2015 “Por medio de la cual se fija el calendario electoral para la nueva elección de alcalde de Bucaramanga – Santander, que se realizará el 14 de diciembre de 2015” y publicada el 15 de octubre de 2015, un día después de darse inicio al calendario electoral, se está inmerso en la causal tercera del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011¹.

¹ARTÍCULO 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

Dicha violación se concreta ya que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece los principios por los cuales se debe regir las actuaciones de la administración pública, pues con la actuación de la Registraduría Nacional del Estado Civil se vulneran principios esenciales como el de publicidad, igualdad e imparcialidad.

Como segundo acto de violación tenemos que no se da cumplimiento a la ley 1437 de 2011 en especial al numeral 9 del artículo 3 y al artículo 65, que establecen que los actos administrativos de carácter general deben ser publicados para que surtan efectos jurídicos y sean oponibles ya si se pueda ejercer los controles que correspondan.

Debe señalarse que la actuación viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado en Colombia con la Ley 17 de 1968 y trasgrede la Convención Americana de Derechos Humanos, normas que entran al país bajo el bloque de constitucionalidad por tratarse de derechos humanos, frente al caso en concreto se vulneran los artículos 25 y 23 respectivamente, los cuales ni más ni menos protegen el derecho a votar y de participar en las contiendas electorales.

En consonancia con lo anterior y por simple lógica jurídica, el acto administrativo que fija el calendario electoral debe ser publicado antes de que inicie el calendario electoral para que tenga plena validez y sea obligatorio; la razón principal de lo señalado es que este, es un acto administrativo de carácter general, que tiene un plus esencial, pues debe conocerse, para que las distintas etapas del proceso electoral (inscripción de candidatos, propaganda, plazos de votación, etc.) puedan cumplirse, los ciudadanos y los actores políticos deben conocer las fechas y los términos con anticipación y certeza.

El Consejo de Estado – Sección Primera, en diferentes sentencias ha precisado que los actos administrativos de carácter general carecen de obligatoriedad antes de su publicación, y las actuaciones desarrolladas con fundamento en ellos son ineficaces y contrarias al principio de publicidad, por lo que procede su revocatoria o anulación.

En igual sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-957 de 1999, sostuvo: “El principio de publicidad garantiza que las decisiones de la administración sean conocidas por los administrados, de manera que puedan ejercer control y defensa frente a las mismas. Un acto que no se publica carece de eficacia y vulnera el debido proceso.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como Yatama vs. Nicaragua (Corte IDH, 2005): donde declaró al Estado responsable por no garantizarle el derecho a participar políticamente al grupo Yatama, al imponer reglas no publicadas oportunamente, impidiendo candidaturas.

III. TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

La acción de tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución Política, es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad. Si bien la jurisprudencia ha señalado que las controversias electorales en principio deben ventilarse por las vías ordinarias como la acción de nulidad electoral o de simple nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativa, existen circunstancias excepcionales en las que la tutela adquiere plena procedencia, especialmente cuando se requiere evitar un perjuicio irremediable derivado de actuaciones electorales arbitrarias o contrarias al principio de publicidad y transparencia.

En el presente caso, la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución No. 13206 del 14 de octubre de 2025 “Por medio de la cual se fija el calendario electoral para

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:

- 1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.*
- 2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.*
- 3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.*
- 4. Cuando la ley lo consagre expresamente.*

PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.”

la nueva elección de alcalde de Bucaramanga – Santander, que se realizará el 14 de diciembre de 2025”, fija el calendario electoral para las elecciones complementarias de la Alcaldía de Bucaramanga el 14 de octubre de 2025, pero solo la publicó el 15 de octubre de la misma anualidad, es decir, un día después de haber comenzado la vigencia del propio calendario que allí se le puso en conocimiento a los ciudadanos.

Este hecho, aunque pueda parecer menor, tiene profundas consecuencias jurídicas y democráticas, pues los plazos electorales comenzaron a correr sin que los ciudadanos, partidos y candidatos potenciales tuvieran conocimiento efectivo del acto administrativo que los regía.

Irregularidad que vulnera claramente el principio de publicidad, que constituye un pilar esencial del Estado Social de Derecho (art. 209 C.P.), y afecta directamente los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad en la contienda política y a la participación democrática (arts. 13 y 40 C.P.).

La Corte Constitucional, en reiteradas sentencias frente al principio de publicidad, ha venido señalando que no trata de una simple formalidad, sino una condición material para el ejercicio efectivo de los derechos, ahora bien, es claro que la publicación tardía del calendario electoral vulnera derechos políticos protegidos por el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos en especial al de elegir y ser elegido, el debido proceso.

Es por esto por lo que el principio de publicidad de publicidad como los demás principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, la Ley 1437 de 20211 y demás normas que rigen la función pública, se erigen como una garantía de transparencia, igualdad y acceso a la información. Sin la debida publicidad de los actos electorales, se imposibilita el ejercicio informado y libre de los derechos políticos”.

De igual forma, se debe advertir que la falta de publicidad oportuna de actos administrativos electorales afecta la validez misma del proceso, al impedir la participación real y efectiva de los ciudadanos.

Por lo tanto, al haberse iniciado el calendario electoral sin su publicación oportuna, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso electoral, pues el acto comenzó a producir efectos jurídicos antes de ser oponible a la comunidad.

El daño que se deriva de esta actuación es inminente, grave, actual y de imposible reparación posterior, cumpliendo así con los requisitos fijados por la Corte Constitucional en las Sentencia T-225 de 1993, T-1316 de 2001 y T-1017 de 2006 y para configurar un perjuicio irremediable.

Inminente, porque el proceso electoral ya está en marcha, con etapas que corren de manera acelerada.

Grave, porque impide la participación de ciudadanos y candidatos que no pudieron enterarse a tiempo del calendario.

Actual, porque el calendario ya surte efectos sin haber sido publicitado correctamente.

De imposible reparación, porque una vez realizadas las elecciones, no existe medio eficaz para restituir el derecho a participar o aspirar en condiciones de igualdad.

En este contexto, la tutela se convierte en el único instrumento capaz de detener los efectos lesivos de un acto administrativo que comenzó a surtir efectos sin cumplir las garantías básicas de publicidad y transparencia.

Si bien el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de interponer una acción de nulidad electoral o una revocatoria directa del acto administrativo, estos mecanismos no son eficaces ni idóneos en este caso debido al factor tiempo.

Razones por las cuales se puede señalar que la tutela procede como mecanismo transitorio en materia electoral cuando la cercanía de los comicios impide que los medios ordinarios brinden una protección eficaz y oportuna.

De igual manera, la Sentencia T-080 de 2021² reiteró que la tutela puede operar transitoriamente para suspender actos cuando se evidencia una amenaza cierta e inminente a los derechos fundamentales y la jurisdicción contenciosa no puede intervenir a tiempo.

Por tanto, la acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio, no para reemplazar la competencia de la jurisdicción contenciosa, sino para preservar los derechos fundamentales mientras esta se pronuncia de fondo, evitando que la ejecución del calendario electoral —viciado de origen por falta de publicidad— consolide un daño constitucional irreversible.

El calendario electoral es un acto administrativo complejo y de carácter general, cuyos efectos se irradian sobre toda la comunidad. Su falta de publicidad oportuna impide la oponibilidad general exigida por los artículos 65 y 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Por lo anterior, la acción de tutela presentada como mecanismo transitorio es plenamente procedente, pues:

- Se acreditan la violación directa de derechos fundamentales al debido proceso, publicidad e igualdad.
- Se configura un perjuicio irremediable derivado de la inminencia de las elecciones.
- Los medios ordinarios son ineficaces por la premura del tiempo electoral.

En consecuencia, se solicita al juez constitucional suspender los efectos del calendario electoral de Bucaramanga y ordenar su ajuste, garantizando la plena efectividad de los derechos fundamentales de participación y transparencia democrática.

IV. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

De conformidad con el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, solicito al despacho judicial que, como medida provisional, ordene la suspensión inmediata de los efectos del acto administrativo mediante el cual la Registraduría Nacional del Estado Civil fijó el calendario electoral para las elecciones complementarias del municipio de Bucaramanga, convocadas para el 14 de diciembre de 2025, hasta tanto se profiera decisión de fondo sobre la presente acción de tutela.

Esta solicitud se formula con el fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, toda vez que el acto en cuestión fue publicado un día después del inicio del calendario (publicación el 15 de octubre e inicio el 14 de octubre), lo que vulnera los principios de publicidad, transparencia y legalidad, así como los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a elegir y ser elegido (artículos 13, 29 y 40 de la Constitución Política).

De no adoptarse la medida provisional, el proceso electoral continuaría ejecutándose bajo un calendario irregular, consolidando una afectación irreparable a los derechos políticos de los ciudadanos y al orden democrático local.

En consecuencia, se solicita respetuosamente al despacho disponer la suspensión inmediata de los efectos del acto administrativo cuestionado mientras se adopta la decisión definitiva sobre la presente tutela.

V. PRETENSIONES

1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, al principio de publicidad y al derecho de elegir y ser elegido.
2. Que se ordene como medida transitoria la suspensión de los efectos del acto administrativo expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante el

² “De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, para la procedencia de la acción de tutela en un caso concreto debe analizarse (i) si la persona respecto de la cual se predica la vulneración es titular de los derechos invocados –legitimación por activa–; (ii) si la presunta vulneración puede predicarse respecto de la entidad o persona accionada –legitimación por pasiva–; (iii) si la tutela fue interpuesta en un término prudente y razonable después de ocurridos los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos –inmediatez–; y (iv) si el presunto afectado dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable –subsidiariedad–”

- cual se fijó el calendario electoral para las elecciones complementarias de Bucaramanga, por haber sido publicado un día después de iniciado el calendario.
3. Que se ordene a la Gobernación de Santander expedir y publicar nuevamente una fecha de elecciones complementarias para las elecciones de Alcalde Municipal de Bucaramanga garantizando la igualdad y participación efectiva de todos los ciudadanos y candidatos.
 4. Que se ordene a la Registraduría Nacional expedir y publicar nuevamente el calendario electoral, respetando el principio de publicidad y garantizando la igualdad y participación efectiva de todos los ciudadanos y candidatos.
 5. Que se advierta a las entidades accionadas que deberá dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por el juez constitucional para evitar nuevas vulneraciones.

VI. PRUEBAS

1. Copia del Decreto del Gobernador de Santander que convoca las elecciones complementarias.
2. Copia del acto administrativo de la Registraduría que fija el calendario electoral.
3. Tener como prueba dicha resolución el enlace [20251015_resolucion-13206-del-14-de-octubre-de-2025.pdf](#) donde consta claramente que la misma se publicó el 15 de octubre de 2025 y no antes del 14 de octubre de 2025 fecha en inicio el calendario electoral para las elecciones atípicas para elegir alcalde de Bucaramanga – Santander.

VI. ANEXOS

1. Pruebas documentales mencionadas en el acápite de pruebas.

VII. NOTIFICACIONES

- Del accionante: pueden notificarme al correo electrónico arrietalucho@hotmail.com
- De las entidades accionadas:
 - **Gobernación de Santander**, al correo electrónico notificaciones@santander.gov.co, info@santander.gov.co
 - **REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL** al correo electrónico notificacionjudicial@registraduria.gov.co
 - **Consejo nacional electoral**, al correo electrónico cnenotificaciones@cne.gov.co

Registraduría Nacional del Estado Civil, Carrera 7 No. 26-20, Bogotá D.C.

Atentamente,

Luis Fernando Arrieta Castro

LUIS FERNANDO ARRIETA CASTRO

C.C. No. 10.99.544.337